

BOLETÍN

Relatoría

Jurisprudencia

Anulada la elección de concejal por parentesco con autoridad

Anulado comparendo por falta de prueba de alcoholimetría

Declarada responsabilidad por un accidente causado por conductor de ambulancia que no respetó señal de pare

Declarada responsabilidad por irregularidades en allanamiento de inmueble

Privación injusta de la libertad por inexistencia del hecho punible

**Enero – Febrero
2025**

***Tribunal Administrativo
del Huila***



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

GRATUITA

Magistrados

Dra. Nelcy Vargas Tovar

Dr. Enrique Dussán Cabrera

Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Dr. Jorge Alirio Cortes Soto

Dr. José Miller Lugo Barrero

Dr. Ramiro Aponte Pino

Relator

Dr. Danny Joan Guevara Silva

TABLA DE CONTENIDO

ACCIÓN DE TUTELA

Rad. 41001- 33 -33- 008 -2024- 00368 -01
Servicio de alimentación en centro de detención transitoria / Orden de traslado del recluso a establecimiento carcelario [pág. 4](#)

RECURSO DE INSISTENCIA

Rad. 41001- 23- 33 -000 -2025- 00017- 00
Negación del recurso de insistencia / Reserva de la investigación disciplinaria [pág. 6](#)

NULIDAD

Rad. 41001- 33 -33-001-2018-00274-01
Nulidad de acto enajenación lote de propiedad del municipio / Nulidad por falsa motivación del acto administrativo / Infracción de la norma en que debía fundarse [pág. 8](#)

NULIDAD ELECTORAL

Rad. 41001-23-33-000-2023-00388-00
Elección del concejal municipal / Inhabilidad por parentesco con autoridad [pág. 10](#)

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Rad. 41001 -33-33- 005- 2018 -00391 -01
Configuración del contrato realidad / Desnaturalización del contrato de prestación de servicios / Auxiliar de facturación de empresa social del estado [pág. 12](#)

Rad. 41001-33-33-001-2016-00251-01
Insubsistencia del empleado en provisionalidad / Incumplimiento de requisitos legales para la posesión del cargo público [pág. 14](#)

Rad. 41001- 33 -33- 004 -2017 -00043- 01
Comparendo por infracción de las normas de tránsito / Omisión de prueba de alcoholimetría / Violación del derecho al debido proceso administrativo [pág. 16](#)

REPARACIÓN DIRECTA

Rad. 41001-33-33-705-2015-00179-01
Responsabilidad del estado por muerte en accidente de tránsito con vehículo oficial / Inexistencia de la culpa exclusiva de la víctima [pág. 18](#)

Rad. 41001-33-33-006-2016-00094-01

Responsabilidad patrimonial del estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia / Falta de cumplimiento de requisitos legales en allanamiento del bien inmueble [pág. 20](#)

Rad. 41001- 33- 33- 001 -2016- 00189- 01

Configuración de la responsabilidad del estado por privación injusta de la libertad / Inexistencia del hecho punible [pág. 22](#)

Rad. 41001-33-33-003-2019-00361-01

Servicio público de transporte informal - mototaxismo / Daño antijurídico no acreditado / Inexistencia de prueba del nexo de causalidad [pág. 24](#)

Rad. 410013333001-2014-00087-01

Responsabilidad del estado por lesiones en accidente de tránsito / Conductor de ambulancia no respetó señal de pare [pág. 26](#)

ACCION DE TUTELA



Magistrado Ponente:	Gerardo Iván Muñoz Hermida
Instancia:	Segunda
Radicación:	41001 -33- 33 -008 -2024- 00368- 01
Accionante:	PERSONERÍA DE ALGECIRAS (H) en representación del PPL CRISTIAN ALIRIO ZAMBRANO UREÑA
Accionado:	INPEC – EPMSC DE NEIVA – USPEC Y OTROS
Fecha:	18 de febrero de 2025

SERVICIO DE ALIMENTACIÓN EN CENTRO DE DETENCIÓN RANSITORIA/ ORDEN DE TRASLADO DEL RECLUSO A ESTABLECIMIENTO CARCELARIO

Problema Jurídico

Corresponde a la Sala establecer, en los términos de la impugnación, si se debe desvincular a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios – USPEC, al no ser de su competencia el suministro de alimentos y demás servicios requeridos en los centros de detención transitorio, como quiera que dicha obligación les corresponde a los entes territoriales, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 65 de 1993.

Extracto

“La PERSONERÍA DEL MUNICIPIO DE ALGECIRAS – HUILA en representación del señor PPL CRISTIAN ALIRIO ZAMBRANO UREÑA instauró acción de tutela contra el INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO – INPEC – EPMSC RIVERA, la UNIDAD DE SERVICIOS PENITENCIARIOS Y CARCELARIOS – USPEC y el DEPARTAMENTO DEL HUILA, solicitando el amparo de los derechos fundamentales a la vida, dignidad humana, integridad personal, alimentación suficiente y oportuna y a la salud de las personas detenidas en la Estación de Policía de Algeciras.

Lo anterior al considerar que son vulnerados en razón a la falta de prestación de los servicios esenciales durante la estancia del accionante en la Estación de Policía de Algeciras – Huila, con ocasión a la condena impuesta en su contra; teniendo en cuenta, que dichas instalaciones solo cuentan con capacidad técnica para custodiar

a tres (3) personas privadas de la libertad – PPL y en la actualidad, se encuentran en total cuatro (4) personas detenidas en dicha instalación. (...)

En ese orden de días, la sentencia de primera instancia que ordenó el amparo será confirmada, en la medida que, la Corte Constitucional ha sido clara en establecer que la responsabilidad de suministrar servicios a los privados de la libertad que se encuentran en los centros de detención transitoria recae de manera provisional a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios hasta el 30 de junio de 2025 y, solo después del 30 de junio de 2025 se le puede hacer exigible a los entes territoriales, sin que ello dé lugar a una interpretación facultativa, conforme a lo expuesto por la entidad accionada en su impugnación.

Finalmente, no sobra aclarar que, la disposición endilgada a la USPEC reviste un carácter transitorio, para garantizar el suministro continuo e ininterrumpido de la alimentación en los centros de detención transitoria hasta el 30 de junio de 2025; destacando que, es de vital importancia la ejecución de la orden impartida, puesto a que la falta de ejecución adecuada de las funciones y competencias de los distintos actores, conllevaría a la afectación de un servicio esencial de las personas privadas de la libertad en los centros de detención transitoria.”

[Sentencia del 18 de febrero de 2025, M.P: GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA, radicación: 41 001 33 33 008 2024 00368 01](#)

RECURSO DE INSISTENCIA



Magistrada Ponente:	Gerardo Iván Muñoz Hermida
Instancia:	Única
Radicación:	41001- 23 -33 -000 -2025- 00017- 00
Demandante:	Kevin David Arriguí Vargas
Demandado:	Procuraduría Regional de Instrucción Huila
Fecha:	22 de enero de 2025

NEGACIÓN DEL RECURSO DE INSISTENCIA / RESERVA DE LA INVESTIGACIÓN DISCIPLINARIA

Asunto

“Resuelve la Sala el recurso de insistencia invocado por el señor Kevin David Arriguí Vargas, en nombre propio, enviado por la Procuradora Regional de Instrucción Huila (ATF), para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015.”

Extracto

“Tal como lo considerara la entidad accionada, la investigación disciplinaria se dio inicio a raíz de un informe de servidor público – Juez Séptimo Administrativo de Neiva – que ordenó la compulsa de copias para que se investigara disciplinariamente al presidente y vicepresidente de la Asamblea Departamental, periodo 1 de enero a 31 de diciembre de 2023, de lo cual ha puesto de presente al accionante para precisarle que no es parte de la investigación, tal como lo preceptúa el artículo 86 de la ley 1952 de 2019. (...)

De otro lado, encuentra la Sala, en el presente caso no es procedente la solicitud de información y copias de las piezas procesales dentro de la investigación disciplinaria, toda vez, que dada la etapa de investigación en que se encuentra, goza de reserva al tenor del artículo 115 de la Ley 1952 de 2019. (...)

Adicionalmente, el accionante pretende se ordene a la entidad accionada la aplicación del artículo 21 de la Ley 1712 de 2014¹⁰, respecto al tratamiento de la información, lo cual no es posible dar aplicación, en la medida que por estar en la etapa de Investigación Disciplinaria revestida de reserva hasta la etapa de formulación de cargos o providencia que ordene su archivo, no es posible desagregar información ni mucho menos expedir copias de la actuación, pues existe una etapa que lo restringe, sin que pueda ser de recibo que mediante derechos de petición encaminados a obtener partes de la actuación, se pueda acceder. (...)

Como se dijera, el recurso de insistencia busca obtener información y copias del proceso disciplinario IUS: E-2024-071906- / IUC: D-2024-3475977, y las razones que tuvo la Procuraduría Regional de Instrucción Huila para negarlo, conducen a concluir que tal información goza de reserva legal dada la etapa procesal en que se encuentra la investigación, debiéndose entonces, declarar bien negada la petición elevada por Kevin David Arrigú Vargas ante dicha entidad.”

[Sentencia del 22 de enero de 2025, M.P: GERARDO IVÁN MUÑOZ HERMIDA, radicación: 41001 23 33 000 2025 00017 00](#)

NULIDAD



Magistrado Ponente:	Ramiro Aponte Pino
Instancia:	Segunda
Radicación:	41001 -33 33- 001-2018-00274-01
Demandante:	María Nancy Villalba Motta
Demandado:	Municipio De Rivera y Otros
Fecha:	18 de febrero de 2025

NULIDAD DE ACTO ENAJENACIÓN LOTE DE PROPIEDAD DEL MUNICIPIO / NULIDAD POR FALSA MOTIVACIÓN DEL ACTO ADMINISTRATIVO / INFRACCIÓN DE LA NORMA EN QUE DEBÍA FUNDARSE

Problema Jurídico

“El sub lite se contrae a establecer si se debe revocar la sentencia; en especial, 1o precisar: i) si se configuró una indebida escogencia del medio de control, ii) si el fallo desconoció el principio de congruencia, porque se analizó si el acto demandado se expidió con vulneración del ordenamiento jurídico, iii) si no se probó el vicio de la falsa motivación, iv) si se configuró una indebida valoración probatoria, v) si los compradores del predio obraron de buena fe y, vi) si el fallo desconoce principios y derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política (artículos 1, 42, 53, 58, 70 y 90) y en la Convención Americana de Derechos Humanos (artículos 5, 9, 11, 17, 21 y 25)”.

Extracto

“En armonía con lo dispuesto en la Ley 388 de 1997, los terrenos baldíos ubicados en suelo urbano de los municipios y distritos que no constituyan reserva ambiental pertenecen a dichas entidades territoriales.

Con base en lo anterior, a través de la escritura pública 3528 del 17 de octubre de 2013 el municipio de Rivera protocolizó la “declaración de propiedad” del baldío urbano ubicado en la calle 4 No. 1-214 (área de 270 m2 y ficha catastral 01-00-0054-0008-

ooo). Actuación registrada el 22 de octubre siguiente en el folio de matrícula inmobiliaria 200-231104.

De acuerdo con las normas y el precedente citado en acápite anterior; dicho bien podía ser vendido por el municipio mediante "licitación pública"; siendo del caso precisar, que actualmente el estatuto de contratación prevé el mecanismo de la selección abreviada para la enajenación de bienes del Estado literal e del numeral 2º del artículo 2º de la Ley 1150 de 2007).

A su vez, le correspondía al municipio establecer el precio de venta, con base en un avalúo comercial.

En esas condiciones, el acto demandado adolece de falsa motivación y desconoce las normas en que debería fundarse; puesto que la venta del inmueble se realizó al margen del proceso previsto en el estatuto general de contratación pública, y de acuerdo con las reglas de la experiencia humana, el precio fijado no se ajusta a su valor real; dada su extensión y vocación ("suelo residencial comercial). (...)

De otro lado, la eventual existencia de buena fe por parte de los beneficiarios no enmienda los vicios de los que adolece el acto demandado, porque se acreditó que la venta se dio al margen del procedimiento legalmente establecido (aspecto no disponible por las partes).

Así mismo, de acuerdo con el análisis efectuado, no se encuentra acreditado que el fallo de primera instancia desconociera los derechos a la dignidad humana, buena fe y propiedad privada; amén de que la cláusula de responsabilidad extracontractual del Estado no tiene aplicabilidad en el presente medio de control. (...)

Merced a lo anterior, se confirmará la providencia impugnada."

[Sentencia del 18 de febrero de 2025, M.P: RAMIRO APONTE PINO, radicación: 41-001 33 33 001-2018-00274-01.](#)

NULIDAD ELECTORAL



Magistrado Ponente:	JOSÉ MILLER LUGO BARRERO
Instancia:	Primera
Radicación:	41001-23-33-000-2023-00388-00
Demandante:	Gilberto Avendaño
Demandado:	Acto de elección de Ronal Eugenio Ferreira como concejal del municipio de Campoalegre para el periodo constitucional 2024-2027
Fecha:	04 de febrero de 2025

ELECCIÓN DEL CONCEJAL MUNICIPAL / INHABILIDAD POR PARENTESCO CON AUTORIDAD

Problema Jurídico

“De acuerdo con el litigio fijado en audiencia inicial, le corresponde a la Sala determinar” ¿si debe anularse el acto de elección del señor RONAL EUGENIO FERREIRA, como concejal del municipio de Campoalegre – Huila para el periodo constitucional 2024- 2027, contenido en el acta de escrutinio formulario E – 26 CON – del día 09 de diciembre de 2023, expedida por LA COMISIÓN ESCRUTADORA MUNICIPAL DE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE, al incurrir presuntamente en la causal de inhabilidad consistente en tener parentesco en segundo grado de consanguinidad con el señor Abimelech Durán Ferreira, quien fungió como Subdirector de Talento Humano y Financiero de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Campoalegre EMAC S.A. E.S.P, durante el año anterior a tal elección?.”

Extracto

“De las funciones transcritas, la Sala resalta que efectivamente el señor Amibelech Durán Ferreira, en su condición de Subdirector Talento Humano y Financiero de la EMAC S.A. E.SP. de Campoalegre – Huila, para el periodo inhabilitante le correspondía adelantar en primera Instancia los procesos disciplinarios de acuerdo a su competencia dando cumplimiento a la Ley, lo cual constituye funciones de carácter administrativo al ejercer decisiones frente a las posibles faltas disciplinarias que pudieran incurrir los empleados de la entidad. (...)”

La conducta inhabilitante establecida en el numeral 4º del artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000 exige que el funcionario dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección haya ejercido autoridad administrativa en el respectivo municipio o distrito y frente a ello la Sala, de acuerdo con el material probatorio allegado, si bien no encuentra acreditado que el señor Amibelech Durán Ferreira haya ejercido esas potestades disciplinarias que le fueron asignadas en el manual de funciones de la entidad, también lo es que el Consejo de Estado ha precisado que dicha inhabilidad no depende del ejercicio efectivo de las potestades que se predicen del cargo en cuestión, sino que basta con poseerla para provocar en el electorado un efecto similar al que se genera cuando efectivamente se materializan dichas potestades. (...)

En conclusión, la Sala declarará la nulidad del acto de elección del señor Ronal Eugenio Ferreira, contenido en el Acta General de Escrutinio Asamblea E- 26 CON del 9 de noviembre de 2023, expedida por la Comisión Escrutadora Municipal de Campoalegre Huila, mediante el cual se declaró electo como concejal de dicho municipio por el partido Alianza Social Independiente – ASI para el periodo constitucional 2024-2027, al encontrarse incurso en la causal de inhabilidad prevista en el artículo 43 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de 2000, pues se constató que tiene parentesco en segundo grado de consanguinidad con el señor Abimelech Durán Ferreira, quien fungió como Subdirector de Talento Humano y Financiero de la Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Campoalegre EMAC S.A. E.S.P, y en ese cargo mantuvo autoridad administrativa durante el año anterior a elección del demandado como concejal de ese municipio.”

[Sentencia del 04 de febrero de 2025, M.P: JOSÉ MILLER LUGO BARRERO, radicación: 41001-23-33-000-2023-00388-00](#)

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Magistrado Ponente:	Ramiro Aponte Pino
Instancia:	Segunda
Radicación:	41001- 33-33- 005- 2018- 00391- 01
Demandante:	Mabel Ortiz Perdomo
Demandado:	E.S.E. Carmen Emilia Ospina de Neiva
Fecha:	28 de enero de 2025

CONFIGURACIÓN DEL CONTRATO REALIDAD / DESNATURALIZACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS / AUXILIAR DE FACTURACIÓN DE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO

Problema Jurídico

“Se contrae a establecer si se debe revocar el fallo impugnado, y establecer si entre la demandante y la entidad accionada existió una relación de naturaleza laboral.

En especial, determinar si se acreditó la subordinación, y en caso afirmativo, analizar si la demandante está asistida del derecho a acceder a las prestaciones reclamadas, y si es procedente condenar en costas a la parte demanda.”

Extracto

“En ese orden de ideas, es menester colegir que la demandante sí cumplía un horario de trabajo; pues tenía la obligación de cumplir los turnos que le asignaban y no tenía autonomía para ejecutar las labores encomendadas, ya que solo se podían modificar contando con la colaboración de sus compañeros o por “situaciones personales”. Siendo del caso destacar, que una de las tareas era “recaudar y entregar diariamente los dineros recibidos por la facturación”.

En tal virtud, no eran simples labores transitorias que se sujetaban a un mero régimen de coordinación (propias de un contrato de prestación de servicios); y a diferencia de

lo que se afirma en la impugnación, debía acatar las órdenes impartidas por la jefe del área; lo cual, entraña una relación de subordinación. (...)

Merced a lo anterior, se infiere que la labor que desarrolló la actora hacía parte del objeto misional de la entidad contratante, que cumplía un horario en las instalaciones oficiales y estaba sujeta a órdenes provenientes de una servidora de la entidad.

Así las cosas, está probada la subordinación y que se encubrió una relación de naturaleza laboral; porque si bien es cierto que se pueden prestar servicios a través de un contrato; también lo es, que solo se permite que sea temporalmente (no de manera indefinida), sin la exigencia del cumplimiento de órdenes ni horario (presencialmente), y tampoco para desarrollar actividades propias del objeto misional de la entidad. Mucho menos, que las mismas sean similares a las asignadas a los empleados de planta. Desnaturalizándose de esa manera la esencia de la contratación regulada por la Ley 80 de 1993. (...)

A manera de colofón, la sala considera que, bajo el alero del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, en el sub lite se pudo corroborar que entre la señora Mabel Ortiz Perdomo y la Ese Carmen Emilia Ospina de Neiva existió una relación de naturaleza laboral durante el lapso comprendido entre el 23 de julio de 2014 y el 28 de febrero de 2018, en el cual, aquella fungió en calidad de auxiliar de facturación."

[Sentencia del 28 de enero de 2025, M.P: RAMIRO APONTE PINO, radicación: 41001-33-33- 005- 2018- 00391- 01](#)

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO



Magistrado Ponente:	Nelcy Vargas Tovar
Instancia:	Segunda
Radicación:	41001-33-33-001-2016-00251-01
Demandante:	Ronny Fabián Torres Cortés
Demandado:	Municipio Del Agrado (H)
Fecha:	04 de febrero de 2025

INSUBSISTENCIA DEL EMPLEADO EN PROVISIONALIDAD / INCUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES PARA LA POSESIÓN DEL CARGO PÚBLICO

Problema Jurídico

“De acuerdo con los planteamientos del recurso de apelación, le corresponde a la Sala determinar, si el acto administrativo demandado, Resolución No. 001 del 5 de enero de 2016, que declaró insubsistente el nombramiento del demandante en el cargo de Comisario de Familia con funciones de Director de Justicia del Agrado (H), se encuentra viciado de nulidad por *falsa motivación*, consecuentemente, establecer si el actor tiene derecho al reintegro y al pago de los salarios dejados de percibir, junto con los perjuicios morales reclamados en la demanda.”

Extracto

“Dentro del presente asunto, el demandante pretende la nulidad del acto acusado, advirtiendo que el mismo adolece de falsa motivación y desviación de poder, lo primero, porque desconoció que el cargo de comisario de familia es de carrera administrativa y dejó de invocar las causales autorizadas para el retiro del servicio en dicha clase de empleos⁴⁹, además los fundamentos del mismo (Circular 05 de 2005 y Decreto 1228 de 20022) se habían expulsado del ordenamiento jurídico, y lo segundo, debido a que su retiro del servicio obedeció a razones políticos más no de mejoramiento del servicio; situación que no fue reconocida por el juez de primera instancia, tras considerar que el demandante al posesionarse en el cargo no cumplió con los requisitos exigidos y que con su retiro se buscó el mejoramiento del servicio, sin estar acreditado que su desvinculación obedeció al proselitismo político. (...)”

Lo anterior, por cuanto el incumplimiento de los requisitos para desempeñar el cargo por parte del señor Ronny Fabián Torres Cortés se traduce en una inadecuada e irregular prestación del servicio, el cual se buscó mejorar con el nombramiento de Arelix Fernanda Palacios Valderrama mediante la Resolución No. 06 del 6 de enero de 2016, quien al momento de la posesión contaba con tarjeta profesional de abogada y especialización en derecho administrativo y constitucional⁵⁴ como se aprecia en su hoja de vida, por manera que dicha profesional del derecho, cumplía con los requisitos del empleo y con ello, se confirma que la intención de la entidad demandada con la resolución acusada fue el “mejoramiento de la calidad profesional frente a la prestación del servicio asignado al cargo”, como se consignó en dicho acto administrativo.

Recapitulando, se encuentra que la Resolución No. 001 del 5 de enero de 2016 que declaró insubsistente el nombramiento del actor en el cargo de comisario de familia, no adolece de la falsa motivación ni la desviación de poder alegada por el actor en la demanda y en la alzada, por ello, dicho acto administrativo preserva su presunción de legalidad.

Por todo lo expuesto, habrá de desestimarse los argumentos del recurso de apelación y confirmarse la sentencia impugnada en cuanto denegó las pretensiones, por las razones aquí esgrimidas.”

[Sentencia del 04 de febrero de 2025, M.P: NELCY VARGAS TOVAR, radicación: 41001-33-33-001-2016-00251-01](#)

NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO

Magistrado Ponente:	Enrique Dussán Cabrera
Instancia:	Segunda
Radicación:	41 001 33 33 004 2017 00043 01
Demandante:	Raúl Eliécer Ramos Torres y otros
Demandado:	Municipio de Neiva (H)
Fecha:	04 de febrero de 2025

COMPARENDO POR INFRACCIÓN DE LAS NORMAS DE TRÁNSITO / OMISIÓN DE PRUEBA DE ALCOHOLIMETRÍA / VIOLACIÓN DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO

Problema Jurídico

“Conforme a la apelación de la parte demandada, y acorde a lo establecido en el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, debe determinarse si se revoca, confirma o modifica el fallo de primera instancia, en el sentido de establecer:

- i) Si el procedimiento administrativo realizado por la parte demandada el cual terminó declarando contravencional mente responsable al señor Raúl Eliécer Ramos Torres por violar el artículo 131 literal f correspondiente a “conducir bajo el influjo de alcohol o bajos los efectos de sustancias psicoactivas” del Código Nacional de Tránsito, es violatorio del debido proceso por defectuosa valoración probatoria.
- ii) Si los perjuicios de lucro cesante a los que fue condenada la entidad, no debieron soportarse en el dictamen pericial, por carecer de credibilidad, profesionalismo y experticia, y dejar dudas sobre el método utilizado, ya que no se tuvo en cuenta la contabilidad de la empresa a la que estaba vinculado el actor.
- iii) Si se deben decretar pruebas de oficio en esta instancia, con el fin de establecer el promedio devengado del señor Raúl Eliécer Ramos Torres, quien ejercía la labor de taxista al momento del comparendo.”

Extracto

“Ahora bien, llama la atención que, en la historia clínica, por lo menos de la E.S.E Carmen Emilia Ospina, donde fue atendido por primera vez el señor Raúl Eliécer, no se advirtiera que este se encontraba en estado de alcoholemia, pues es conocido que cuando esto ocurre, el cuerpo médico así lo deja plasmado, en dicho documento. (...)

Otra situación que llama poderosamente la atención es un audio que le fue puesto en la audiencia de pruebas al señor Carlos Eduardo Hamon Quintero funcionario encargado de tomar la prueba de alcoholemia al señor Raúl Eliécer Ramos Torres, quien a la pregunta sobre si esa era su voz, respondió afirmativamente.

En aquel audio se advierte sobre una conversación que sostiene el citado funcionario con otro señor, donde el primero de ellos reconoce que el señor Raúl Eliécer no olía a trago y que en varias oportunidades este le advirtió que estaba enfermo. (...)

De lo señalado por el perito, se puede evidenciar que el diagnostico que tuvo el señor Raúl Eliécer Ramos Torres de “DIABETTES MELLITUS HIPERTENSIÓN ARTERIAL”, no lo imposibilitan para desempeñar su profesión de taxista; aunado a que, lo que pretende la parte demandada al cuestionar, si en actor se encuentra o no en capacidad de seguir desempeñando su labor, se aleja de la naturaleza del procedimiento administrativo sancionatorio que para este caso, fue el de infringir el artículo 131 literal f denominada conducir bajos los influjos del alcohol o bajo los efectos de sustancias psicoactivas.”

[Sentencia del 04 de febrero de 2025, M.P: ENRIQUE DUSSÁN CABRERA, radicación: 41001-33- 33 -004- 2017 -00043- 01](#)

REPARACIÓN DIRECTA



Magistrado Ponente:	Nelcy Vargas Tovar
Instancia:	Segunda
Radicación:	41001-33-33-705-2015-00179-01
Demandante:	Noe Chanchi y Otros
Demandado:	Nación – Ministerio De Defensa – Ejército Nacional, Instituto Nacional De Vías –Envías– Y Municipio de Pitalito
Fecha:	28 de enero de 2025

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR MUERTE EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO CON VEHÍCULO OFICIAL / INEXISTENCIA DE LA CULPA EXCLUSIVA DE LA VÍCTIMA

Problema Jurídico

“La Sala debe resolver si revoca o no la sentencia del 21 de enero de 2022, para lo cual debe establecer, si la muerte de la señora Carmen Parra de Valderrama en el accidente automotor el 11 de julio de 2014, es imputable a la Nación – Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional, al Instituto Nacional de Vías -INVIAS- y al Municipio de Pitalito; o si, por el contrario, hay ausencia de responsabilidad o configuración de eximente por causa extraña, tal como lo sostiene el juez de instancia.”

Extracto

“Cuando se trata de la producción de daños originados en el despliegue de actividades peligrosas -por parte de la entidad pública o de sus agentes-, como lo es la conducción de automotores, es a esta a quien corresponde jurídicamente la guarda de la actividad y quien quedará obligado a responder por los perjuicios que se ocasionen por la concreción del riesgo creado.

Ahora bien, sobre la supuesta configuración de la eximente de responsabilidad por hecho de la víctima³¹, se considera –contrario al juez de instancia - que no está acreditado que la conducta de la señora Carmen Parra fue la causa eficiente del accidente; dado que el hecho de ser peatón y cruzar una vía vehicular en zona residencial sin acompañante por ser un adulto mayor, per se, no es un

incumplimiento a sus deberes de autoprotección, ni una vulneración a las normas de tránsito. (...)

De igual forma, no está acreditado que la señora Carmen Parra, cruzó la vía en un punto prohibido. Por el contrario, en el croquis realizado en el informe policial de accidente de tránsito No. A, se puede evidenciar que los hechos ocurrieron en una intersección o “bocacalle”, el cual es un sitio autorizado para cruzar una vía en el perímetro urbano, de conformidad con el inciso segundo del párrafo segundo del artículo 58 de la ley 769 de 2002.

De ahí que, el suceso causalmente vinculado a la producción del daño no es predicable de la víctima, y sí resulta imputable a la Nación – Ministerio de Defensa – Ejército Nacional, propietario del vehículo oficial, en atención a la teoría del riesgo excepcional, dado que en el despliegue de actividades peligrosas le corresponde jurídicamente la guarda de la actividad.”

[Sentencia del 28 de enero de 2025, M.P: NELCY VARGAS TOVAR, radicación: 41001-33-33-705-2015-00179-01](#)

REPARACIÓN DIRECTA



Magistrada Ponente:	Jorge Alirio Cortés Soto
Instancia:	Segunda
Radicación:	41001-33-33-006-2016-00094-01
Demandante:	José Neiver Puerto Aguirre
Demandado:	NACIÓN - FGN - PGN - MDN - EJC NAL
Fecha:	04 de febrero de 2025

RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA / FALTA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES EN ALLANAMIENTO DEL BIEN INMUEBLE

Problema Jurídico

Se plantea resolver el Tribunal:

3.3.1 ¿Debe revocarse la decisión de primer grado, porque la Fiscalía General de la Nación no incurrió en falla del servicio al realizar el allanamiento del 2 de agosto de 2014 al obrar dentro del marco constitucional y legal en la función constitucional de investigar delitos, observando los protocolos establecidos?

3.3.2. De no accederse a lo anterior, ¿Debe modificarse la sentencia de primera instancia, porque la indemnización reconocida por los perjuicios morales no repara las graves violaciones a los derechos fundamentales de la parte actora a raíz del allanamiento que sufrieron y en atención a los lineamientos jurisprudenciales sobre la reparación integral y los daños derivados de actos estatales que implican vulneración de derechos humanos?

La posición del Tribunal es que se debe confirmar la decisión recurrida, al configurarse la responsabilidad estatal por falla en el servicio debido a la actuación irregular de la Fiscalía General de la Nación durante el allanamiento del 2 de agosto de 2014 ante el incumplimiento de los requisitos legales y constitucionales que rigen estas diligencias y, no procede modificar la condena por perjuicios morales pues no se acreditaron las graves secuelas señaladas.

Extracto

“En el caso concreto, el daño antijurídico consiste en la vulneración injustificada de derechos fundamentales a la inviolabilidad del domicilio, la dignidad humana y la intimidad de los demandantes, ocasionada por un allanamiento irregular ejecutado por la Fiscalía General de la Nación con apoyo del Ejército Nacional; derechos que gozan de protección constitucional en los artículos 15, 156, 287 y 428 de la Constitución Política de Colombia. (...)”

Sin perjuicio de la reserva legal aludida, al no contarse con la plena identificación del testigo o informante y de contera no poseer válidamente motivos fundados para la diligencia de registro y allanamiento, estima la Sala que la diligencia del 2 de agosto de 2014 fue adelantada sin cumplir los protocolos legales al carecer de información certera o inexistente, y si bien la norma también habilita que tales motivos fundados se indiquen en informe de policía judicial, esto no reemplaza al testigo o informante cuando la información derive de estos. (...)”

Por lo expuesto la Sala confirmará en este punto la decisión apelada, ya que la actuación de la Fiscalía General de la Nación antes y durante la diligencia de registro y allanamiento cuestionado, careció de diligencia y rigurosidad en la verificación de la información del informante o del correo electrónico recibido y desatendió los protocolos establecidos que condujeron a que el juez de control de garantías no le diera su aprobación, produciéndose así la falla del servicio.

Dicha falla es el hilo conductor que une el sufrimiento, angustia y temores que imprimieron en los demandantes la realización del allanamiento, es decir, hay una relación de causa a efecto entre la falla del servicio señalada y el daño antijurídico causado y de esa manera confluyen los elementos axiológicos para declarar la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación, lo que conduce a confirmar la decisión de primera instancia, desechando lo argumento del recurso.”

[Sentencia del 04 de febrero de 2025, M.P: JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO, radicación: 41001-33-33-006-2016-00094-01](#)

REPARACIÓN DIRECTA



Magistrado Ponente:	Enrique Dussán Cabrera
Instancia:	Segunda
Radicación:	41001 -33 -33- 001- 2016- 00189- 01
Demandante:	Carlos Ariel Garzón Bravo y otros
Demandado:	Nación Fiscalía General de la Nación y otro
Fecha:	11 de febrero de 2025

CONFIGURACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD / INEXISTENCIA DEL HECHO PUNIBLE

Problema Jurídico

“Conforme la apelación de la parte demandante y al tenor de lo establecido en el artículo 328 del CGP, aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, corresponde determinar si debe revocarse la sentencia recurrida porque las actuaciones realizadas por la Nación Fiscalía General de la Nación y la Nación Rama Judicial - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, respecto de la privación de la libertad al señor Carlos Ariel Garzón Bravo, configuraron un daño antijurídico.”

Extracto

“El daño alegado por los demandantes corresponde a la privación injusta de la libertad sufrida por el señor Carlos Ariel Garzón Bravo, en el marco del proceso penal que se adelantó en su contra por el delito de concierto para delinquir y rebelión, pues está acreditado que el 19 de noviembre de 2003 la Fiscalía cuarta delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados dictó medida de aseguramiento de detención preventiva sin beneficio de libertad al señor Carlos Ariel Garzón Bravo. (...)”

Conforme a lo dispuesto por el precedente jurisprudencial y, analizado el material probatorio obrante, esta Sala considera que en el presente asunto le asiste razón al apoderado de los demandantes al oponerse a la decisión del a quo, que negó las pretensiones de la demanda, al haberse configurado uno de los eventos en los cuales se debe declarar la responsabilidad patrimonial del Estado por la privación de la libertad, al considerar la medida como irracional y desproporcionada.

Es de precisar que del material obrante en el plenario se pudo corroborar que la investigación penal adelantada en contra del señor Carlos Ariel Garzón Bravo por los delitos de concierto para delinquir y rebelión, culminó con la preclusión de la mismas y las causales que sustentaron dicha decisión por parte de la Fiscalía Quinta Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Neiva, de fecha 9 de agosto de 2013, corresponden a “que la conducta no ha existido ni la han cometido”.

Así las cosas, como quiera que las causales invocadas por la Fiscalía General de la Nación al momento de solicitar la preclusión de la acción penal, configuran la premisa de la Corte Constitucional, al considerar que en cualquiera de estos dos eventos, es decir cuando “el hecho no existió” o la conducta era objetivamente atípica”, se concluye que la decisión de privar de la libertad al investigado, resulta “irrazonable y desproporcionada”, en consecuencia está demostrado en el presente asunto que se causó un daño que tiene el carácter de antijurídico, que los demandantes no estaban en la obligación de soportar. (Subrayado de la Sala).”

[Sentencia del 11 de febrero de 2025, M.P: ENRIQUE DUSSÁN CABRERA, radicación: 41001- 33 -33 -001- 2016- 00189- 01](#)

REPARACIÓN DIRECTA



Magistrado Ponente:	José Miller Lugo Barrero
Instancia:	Segunda
Radicación:	41 001 33 33 006 2018 00416 01
Demandante:	Nelson Manuel Cadena Castañeda y Otros
Demandado:	Municipio de Neiva
Fecha:	11 de febrero de 2025

SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE INFORMAL - MOTOTAXISMO / DAÑO ANTIJURIDICO NO ACREDITADO / INEXISTENCIA DE PRUEBA DEL NEXO DE CAUSALIDAD

Problema Jurídico

“Como el a quo negó las pretensiones y los demandantes recurrieron ante esta corporación, debe la Sala resolver” ¿si el MUNICIPIO DE NEIVA es responsable administrativa y patrimonialmente de los daños reclamados por los demandantes, consistentes en la disminución del transporte de pasajeros en los vehículos de su propiedad y si los mismos son consecuencia de la omisión en que incurrió la entidad al no ejercer el control respectivo al transporte público informal –mototaxismo- en la ciudad de Neiva?.

Extracto

“Evidencia la Sala que la parte actora basa su pretensión resarcitoria de perjuicios vía reparación directa en la reducción en el número de pasajeros que transportaron en el periodo comprendido entre el 22 de mayo de 2005 y el 23 de mayo de 2019, por cuenta de la omisión en el control de transporte público colectivo informal (mototaxismo), por parte de la administración municipal. (...)”

Al examinar cada uno de los elementos probatorios aportados por los demandantes, evidencia la Sala tales elementos de responsabilidad administrativa -por omisión-, y principalmente el daño, no se acreditan debidamente y por tanto, debe confirmarse la sentencia de primera instancia en cuanto negó las pretensiones de los actores.

Lo anterior, teniendo en cuenta que si bien los demandantes acreditaron ser propietarios de vehículos de transporte público y que a su vez se encontraban afiliados a empresas de transporte público; también es que de ello no se desprende

que se les haya causado el daño que reclaman, pues las empresas de transporte público que remitieron esa información se refieren a la capacidad transportadora, a vehículos vinculados, activos, rutas, entre otros; sin embargo, con las cifras reportadas no se prueba la disminución de pasajeros aludida por la parte actora y menos la causa de la misma.

En efecto, no se demostró las rutas que le eran asignadas a cada vehículo, si las mismas eran afectadas por el transporte informal; si los vehículos de propiedad de los demandantes se encontraban prestando el servicio público en las rutas afectadas por el transporte informal. Tampoco se acreditó que hubieran tenido una disminución en los pasajeros que podían transportar; cabe decir que, debió especificarse dicha reducción, lo cual hubiese permitido estimar el número de pasajeros que inicialmente movilizaban y que con la afectación del fenómeno del mototaxismo dejó de transportar cada uno de estos vehículos. (...)

Se confirmará la sentencia recurrida en cuanto negó las pretensiones de los actores, comoquiera que la parte actora no probó el daño y tampoco la relación de causalidad entre el daño alegado y la presunta omisión que le atribuye al municipio de Neiva, esto es, que la disminución de pasajeros a transportar fuera consecuencia única y determinante de la ausencia o falta de control por parte del ente territorial.”

[Sentencia del 11 de febrero de 2024, M.P: JOSÉ MILLER LUGO BARRERO, radicación: 41001-33-33-003-2019-00361-01](#)

REPARACIÓN DIRECTA



Magistrado Ponente:	Jorge Alirio Cortés Soto
Instancia:	Segunda
Radicación:	41001-33-33-001-2014-00087-01
Demandante:	Julio Andrés Trujillo y O
Demandado:	E.S.E San Vicente de Paul de Garzón
Fecha:	18 de febrero de 2025

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR LESIONES EN ACCIDENTE DE TRÁNSITO / CONDUCTOR DE AMBULANCIA NO RESPETÓ SEÑAL DE PARE

Problema Jurídico

“Atendiendo las previsiones del artículo 328 del CGP aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, al haber apelado ambas partes el Tribunal resolverá esta instancia sin ninguna limitación y a partir de los reparos formulados por ellas, surgen los siguientes problemas jurídicos:

- i) ¿Debe revocarse parcialmente la decisión de primer grado, en cuanto no se le reconoció a los demandantes la indemnización por perjuicios morales causados con ocasión de las lesiones sufridas en el accidente de tránsito, las intervenciones quirúrgicas para restablecer su salud y tampoco se le indemnizó la pérdida de oportunidad que tuvo de alcanzar un empleo al que se había presentado?
- ii) ¿Debe revocarse la decisión de primer grado, por cuanto los daños no son imputables a la entidad demandada pues la ambulancia se movilizaba con su sirena de advertencia y el lesionado no atendió esta señal, por lo cual el accidente se produjo por culpa exclusiva de la víctima, quien además no acreditó los ingresos para que se le indemnizara el lucro cesante ni la convivencia con los demás demandantes?
- iii) De no acogerse lo anterior, ¿Debe revocarse parcialmente la decisión recurrida para que se imponga a Liberty Seguros como llamada en garantía, la obligación de asumir el pago de los perjuicios a los que fue condenada la ESE Hospital San Vicente de Paul de Garzón con ocasión del accidente de tránsito ocurrido el 18 de diciembre de 2012?

La tesis del Tribunal es que se debe modificar la decisión para reconocer y pagar, únicamente a la víctima de las lesiones, los perjuicios morales reclamados, reducir la condena al pago de los perjuicios materiales por lucro cesante y confirmar en lo demás la sentencia recurrida.”

Extracto

“En el presente caso los demandantes señalan que el daño está representado por las lesiones sufridas por el señor Julio Andrés Trujillo Duarte, como consecuencia del accidente de tránsito ocurrido el 18 de diciembre de 2012 cuando se transportaba en su motocicleta de placas SDE05C y chocó con la ambulancia de placas OBX174 sufriendo fractura distal de radio izquierdo y trauma craneoencefálico, por tanto, se afectaron los bienes jurídicos de la salud e integridad física del lesionado. (...)”

“No se aportó en tiempo la prueba de estar la ambulancia transportando un paciente en delicado estado de salud que ameritara el uso de la sirena o señal de emergencia para obtener que se le diera prelación en su circulación y, por ende, estaba obligaba a respetar la prelación que tenían otros vehículos como es el caso de la motocicleta donde viajaba el demandante lesionado, lo cual da paso para darle credibilidad a los testigos. (...)”

En este caso el señor Wilmer González Trujillo como conductor de la ambulancia no respetó la señal de pare que tenía al llegar a la carrera 5 en su desplazamiento por la calle 12 como indica el croquis de accidente (f. 50) y el testimonio de los guardas de tránsito, obstruyendo la vía del vehículo tipo motocicleta en donde iba el lesionado, quien transitaba por la carrera quinta en dirección sur norte.

La omisión o desatención de los reglamentos de tránsito por parte del conductor de la ambulancia hacen que se configure la falla en el servicio, toda vez que la ambulancia es de propiedad de la demandada, era conducida por su servidor Wilmer González según el contrato de prestación de servicios que tenían celebrado3, teniendo el control y la guarda del vehículo, debía realizar la conducción sujetándose a las reglas de tránsito y no lo hizo, incumpliendo la carga obligacional necesaria para imputarle el daño antijurídico pues no fue por culpa de la víctima que se causó la colisión.”

[Sentencia del 18 de febrero de 2025, M.P: JORGE ALIRIO CORTÉS SOTO, radicación: 410013333001-2014-00087-01](#)

NOTA

La Relatoría es la encargada de clasificar, titular y extraer los autos y sentencias de la Corporación para organizar la jurisprudencia, pero advierte a sus usuarios que no se exoneran de verificar el contenido de lo publicado en el [aplicativo SAMAI](#).

CONTÁCTENOS

Palacio de Justicia Neiva- Huila

Carrera 4 No. 6-99 Oficina 1108

Email: reltadmnei@cendoj.ramajudicial.gov.co

<http://ramajudicialdelhuila.gov.co/newSite/administrativo/>

<https://www.facebook.com/tribunaladministrativodelhuila>

BOLETÍN

Relatoría

*Tribunal Administrativo
del Huila*



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

GRATUITA